

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

El catorce (14) de de julio dos mil veintidós (2022), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, se constituyó en audiencia, con el fin de resolver el recurso de apelación y el grado jurisdiccional de consulta, contra la sentencia proferida en primera instancia en el presente proceso ordinario laboral promovido por la señora **BEATRIZ ELENA FORERO URIBE**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES** (en adelante COLPENSIONES) y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.** (en adelante PROTECCIÓN S.A.), tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-007-2020-00078-01.

AUTO

De conformidad con la sustitución de poder que milita a folio 405 del expediente, allegada junto con los alegatos de conclusión de segunda instancia por la firma MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S. quien funge como apoderada judicial principal de Colpensiones, se reconoce personería a la abogada SANDRA MILENA CARTAGENA ARROYAVE, portadora de la T.P. 115.884 del C. S. de la Judicatura, para que continúe representando los intereses de COLPENSIONES en el presente proceso como abogada sustituta.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

La demandante pretende con la presente acción judicial, que se declare la nulidad o ineficacia de su traslado al régimen pensional de ahorro individual con solidaridad (en adelante RAIS), ordenando su retorno al régimen pensional de prima media con prestación definida (en adelante RPM) administrado por Colpensiones.

Como fundamento fáctico de sus pretensiones relata en síntesis la actora que se afilió al RPM administrado por el extinto ISS en 1981 y que en el año 1997 se trasladó al RAIS a través de la AFP PROTECCIÓN S.A.

Expone que al momento de su afiliación al RAIS, los asesores de la AFP PROTECCIÓN S.A. no le indicaron sobre los riesgos que implicaba su traslado al RAIS, no le indicaron que su pensión podría llegar a ser inferior a la del RPM, no le advirtieron que eventualmente podría no pensionarse en caso de que su capital fuera insuficiente, no le advirtieron que el valor de la pensión dependería de la modalidad pensional que escogiera, no le indicaron que la negociación de su bono pensional implicaría un sacrificio financiero, no le explicaron cómo funciona realmente el fondo privado.

Manifiesta que además de las anteriores omisiones, fue engañada al indicarle que su condición pensional en el fondo privado sería más ventajosa, que tendría una mejor pensión, que el RPM desaparecería, que no existirían desventajas frente al RPM.

Finalmente indica que el 22 de enero de 2020 presentó solicitud ante Colpensiones para que se aceptara su traslado al RPM, la cual le fue despachada de manera negativa mediante comunicación del 23 de febrero de 2020.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El *a quo* despachó de manera favorable las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia del traslado de la demandante al RAIS, y condenando en consecuencia a la AFP PROTECCIÓN S.A. a trasladar a COLPENSIONES la totalidad de las sumas que hubiese recibido como producto de las cotizaciones realizadas por la demandante durante su permanencia en el RAIS, es decir, el 100% de las cotizaciones, con sus respectivos rendimientos financieros, incluyendo además en dicha devolución los porcentajes destinados a administración, pago de primas de seguros previsionales y fondo de garantía de pensión mínima, ordenando a su vez a COLPENSIONES a reactivar de manera inmediata la afiliación de la demandante en el RPM, sin solución de continuidad y a recibir la devolución de los dineros ordenados en la sentencia.

Para fulminar condena, el *a quo* argumentó que la Corte Suprema de Justicia tiene fijada una línea jurisprudencial sobre el tema de la afiliación a un régimen pensional y se sintetiza en la obligación de brindar una información completa, suficiente, idónea y

comprensible sobre las características de los regímenes, determinando e informando la conveniencia e inconvenientes de uno y otro régimen, y la inversión de la carga de la prueba de la información brindada en cabeza de la AFP.

Seguidamente expuso que en el presente proceso no se probó por parte de PROTECCIÓN S.A. que, al momento de la afiliación de la demandante, haya cumplido con el deber legal de otorgar una explicación integral sobre la regulación de los regímenes pensionales, las ventajas y desventajas, resultando insuficiente como prueba de la existencia de un consentimiento suficientemente informado la suscripción del formulario de afiliación pre impreso, por lo que consideró que existe mérito para acceder a las pretensiones y declarar la ineficacia del traslado.

Declaró no probadas las excepciones propuestas por las demandadas, entre ellas la de prescripción y finalmente condenó en costas a la AFP PROTECCIÓN S.A., absolviendo de las mismas a COLPENSIONES.

3. DEL RECURSO DE APELACIÓN

La anterior decisión fue apelada de manera parcial por la apoderada de PROTECCIÓN S.A., en lo que tiene que ver con la orden de devolver a Colpensiones las cuotas de administración y los seguros previsionales, argumentando que los descuentos efectuados a la demandante por dichos conceptos, se realizaron por cuenta de una disposición legal vigente, y se trata de comisiones ya pagadas y causadas durante la administración de los dineros de la cuenta de ahorro individual de la demandante, y en el hipotético caso en el que se asuma que PROTECCIÓN no realizó su gestión de administración y se ordene la devolución de dichos conceptos a Colpensiones, no debería proceder entonces el traslado de los aportes de la demandante con todos sus rendimientos financieros generados, pues en caso de que se declare la nulidad o la ineficacia del traslado, la consecuencia jurídica sería que las cosas vuelvan al estado anterior, y estos rendimientos, se generaron por la buena gestión de administración, y en ese sentido solo habría lugar a trasladar los aportes pero sin los rendimientos, ni las cuotas de administración, ni ningún otro emolumento que se haya generado como producto de la buena gestión de administración.

En lo que tiene que ver con el seguro previsional, solicita que PROTECCIÓN S.A. no sea obligada a devolver el valor de dicho seguro, dado que mensualmente de la cuenta de ahorro individual de la demandante se descontó y se le pagó a una aseguradora

previsional para que en caso que hubiese existido la ocurrencia de un siniestro de invalidez o de sobrevivencia, esta aseguradora pagara una suma adicional que permitiera financiar dichas pensiones, y por tal razón PROTECCIÓN se encuentra imposibilitada para recobrar dichos dineros para remitírselos a Colpensiones, dejando claro que esa aseguradora previsional fue un tercero de buena fe que nada tuvo que ver con el contrato suscrito entre PROTECCIÓN y la demandante.

4. DE LOS ALEGATOS EN ESTA INSTANCIA:

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, únicamente la apoderada de la DEMANDANTE, allegó escrito de alegaciones, en los cuales señaló textualmente lo siguiente:

“1. De la declaratoria de Ineficacia de Traslado.

En relación con la decisión del Juzgado 24 Laboral del Circuito de declarar la ineficacia de traslado de régimen pensional que hiciese mi representado y las consecuencias que de ello se derivan, solicito señores magistrados **se confirme** dicha determinación, toda vez que la misma se sustentó en los parámetros que ha venido estableciendo la Honorable Corte Suprema de Justicia en la línea jurisprudencial desarrollada desde el año 2008 hasta la fecha, y cuyas decisiones hasta hoy uniformes, en relación con el caso que nos ocupa son completamente aplicables, tales como las proferidas en sentencias SL1452-2019; SL1688-2019; SL 1689-2019; STL3202-2020, que han reiterado y compilado las reglas de derecho que se han definido claramente, respecto del tema objeto de estudio y que han establecido que en estos casos, no importa cosa diferente al cumplimiento o no del deber de información, que existe desde que nació la Ley 100 de 1993, y que no se probó por parte del fondo privado.

En primera instancia quedó plenamente acreditado que **los fondos privados demandados no cumplieron con el deber legal, profesional y ético que les asiste a las Administradoras de Fondos de Pensiones, de brindar una información completa, veraz, clara, precisa, técnica, adecuada y oportuna**, y que por demás se encuentra revestida de gran importancia para la vida y dignidad de mi representada.

Se colige del interrogatorio de parte absuelto por la demandante que los promotores u “asesores” de los diferentes fondos privados nunca le advirtieron de los **Riesgos** de su traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por los distintos fondos donde estuvo afiliada;

ya que solo le hablaron sobre los **beneficios**, NUNCA se hicieron advertencias y está claramente manifiesta que nunca pudo conocer la verdadera incidencia de su traslado.

De la línea jurisprudencial a que se hace referencia se pueden extraer las siguientes reglas:

1. El deber de asesoría existe desde que nació el sistema pensional de la Ley 100 de 1993. Así se deduce del contenido del Decreto 663/93, artículo 97.
2. El consentimiento vertido en formulario no es suficiente para demostrar deber de información profesional pues ni la firma ni las afirmaciones que se consignan en un formulario pre impreso por el mismo fondo privado lo demuestra. Lo que hace el usuario es adherirse al contenido de tal documento.
3. Desde siempre, la información que se entregue debe ser clara, cierta, comprensible y oportuna.
4. En todos los casos se invierte la carga de la prueba por cuanto:
 - a. Se presenta una negación indefinida de que no se dio la información en los términos anteriores. Corresponde al fondo demostrar el supuesto contrario a esa negación, es decir, que si dio la información con esas características.
 - b. Por lo establecido en el artículo 1604 del Código Civil según el cual quien ha debido tener la diligencia y cuidado debe demostrarlo.
 - c. Es una regla de justicia. El afiliado está en una posición probatoria complicada y el fondo está en mejor posición de demostrar.
 - d. La información suministrada al momento de la afiliación debe reposar en los archivos del fondo.
 - e. El afiliado es la parte débil pues los fondos tienen una clara preeminencia frente a él por ser un lego en la materia y ellos unos expertos derivado de su posición en el mercado, la experticia y el control de la operación.
5. Alcance de la jurisprudencia de la Corte en el tema. La regla identificable en todas las sentencias de la Corte es que los fondos debieron asesorar desde el principio y que en todos los casos se invierte la carga de la prueba.
6. En estos casos no importa cosa diferente al cumplimiento o no del deber de información. Por ello, en estos asuntos no tiene incidencia si la persona está o no en transición, si se tiene o no un derecho consolidado, si se está o no próximos a pensión, etc. Dijo textualmente la Corte que “La violación al deber

de información se predica frente a la validez del acto jurídico de traslado, considerado en sí mismo”.

7. La reasesoría no convalida el acto. La oportunidad y completitud de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado y no con posterioridad. Por ello, si no se dio la información necesaria al momento de la afiliación inicial que implicó el cambio de traslado, se considera que no se cumplió con el deber de información. Por esta misma razón los traslados posteriores entre fondos privados no convalidan el acto.
8. En este tipo de asuntos debe ordenarse la devolución de todos los dineros INCLUYENDO LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.
9. No hay prescripción. El tema de ineficacia es imprescriptible. Desde el nacimiento el acto carece de efectos jurídicos y la sentencia comprueba o constata ese hecho. Además, la declaratoria de ineficacia va atada al derecho a la pensión misma que es imprescriptible.
10. El afiliado tiene derecho a reclamar la mejora en el valor de su pensión en cualquier tiempo. Esta afirmación permite deducir que incluso en los casos en los cuales la persona ya está percibiendo pensión del fondo privado aplican estas reglas.
11. En este tipo de asuntos no se aplican normas civiles. Por ello, no existe la figura del saneamiento de la nulidad pues lo que debe declararse es la ineficacia y no la figura de las nulidades sustanciales. La excepción en este caso es lo relacionado con las consecuencias prácticas de la nulidad en lo que si se aplica el artículo 1746 del Código Civil.
12. No se puede exigir al demandante en este tipo de asuntos que demuestre vicios en el consentimiento pues no es la nulidad la figura que se aplica.

Por estas razones señores magistrados se puede evidenciar que en el caso concreto, la parte demandada no cumplió con su deber de información, lo cual incidió directamente en el derecho pensional fundamental de mi representado, en el aseguramiento del mínimo vital y una vida digna, y lo impulsó a iniciar el presente proceso, con todo el desgaste que ello conlleva. En este orden de ideas, se dan todos los elementos que tiene la Corte Suprema de justicia hasta hoy unificada, para que las pretensiones que aquí se han formulado sean acogidas y en consecuencia sea confirmada la decisión de primera instancia en lo que respecta a la declaración de ineficacia de traslado con las consecuencias de dicha declaratoria.”

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER.

El problema jurídico para resolver se circunscribe a establecer si la afiliación de la demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad es ineficaz y de serlo, en qué términos y condiciones se debe realizar el traslado a COLPENSIONES del importe de las cotizaciones efectuadas en el RAIS por la demandante.

Tramitado el proceso en legal forma y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la APELACIÓN y de la CONSULTA de la sentencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 14 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

De conformidad con lo dispuesto el art. 14 de la Ley 1149 de 2007 además de resolverse la apelación de PROTECCIÓN S.A., se consultará la sentencia en favor de COLPENSIONES por haberle resultado adversa, por lo que, la legalidad del fallo será estudiada en su integridad.

Primeramente, es necesario manifestar que el traslado o afiliación a los distintos regímenes pensionales la establece el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, disponiéndose además en los Arts. 60 y 114 de esta ley, como en los arts. 10, 12 y 15 del Decreto 720 de 1994 vigente para la época del traslado de la demandante, que el traslado de régimen pensional debe partir de la cabal y completa asesoría que lleve a un asegurado a tomar una decisión responsable e informada, asesoría que ha de entenderse pedagógica, es decir, realmente entendible para cada persona conforme a su grado de cultura y su situación particular, pues los casos no presentan las mismas características o condiciones.

La jurisprudencia de la SCL de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL12136-2014 del 03 de septiembre de 2014, abandonando el concepto de **nulidad** del traslado, precisó que la omisión en la debida asesoría de las AFP al momento del referido traslado lo convierte en **ineficaz**, por violentar la exigencia del literal b) del artículo 13 de Ley 100 de 1993, sobre la obligatoriedad de que tal manifestación de traslado fuera libre y voluntaria y contempló, que de no ser así, la afiliación respectiva quedaría sin efecto y podría realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.

Tal posición, que constituye a la fecha la línea jurisprudencial de la SCL de la Corte Suprema de Justicia sobre dicho tema, ha sido ratificada de manera reiterada en todos los pronunciamientos emanados de dicha corporación, como en las sentencias SL1688-2019 y SL1689-2019, ambas proferidas el 8 de mayo de 2019, en las que, además la Corte fijó unas conclusiones jurisprudenciales en torno al tema de la ineficacia o nulidad de traslado de régimen, las que se resumen de la siguiente manera:

1. Las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional. primeramente, con un deber de información necesaria (en vigencia del decreto 663 de 1993), luego de asesoría y buen consejo (en vigencia de la Ley 1328 de 2009 y el decreto 2241 de 2010), y finalmente de doble asesoría (en vigencia de la Ley 1748 de 2014 y el decreto 2071 de 2015)
2. La simple constancia del consentimiento informado vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acredita un consentimiento, pero no que haya sido informado.
3. La carga de la prueba de demostrar que el afiliado recibió la información debida, veraz y suficiente cuando se afilió, le corresponde a la AFP.
4. El precedente de la CSJ en torno a la ineficacia del traslado no aplica sólo a los casos en que el afiliado se cambia de régimen pensional a pesar de tener consolidado un derecho pensional, o contar con una expectativa pensional o derecho a la transición del art. 36 de la ley 100 de 1993, sino en todos los casos de incumplimiento del deber de información.

Es así como, en el presente asunto, está probado, que la accionante, estando afiliada al RPM administrado por el ISS hoy COLPENSIONES, como se acredita con la historia laboral que milita de folio 22 a 25, se trasladó a la administradora del RAIS PROTECCIÓN S.A. el 11 de septiembre de 1997, como se advierte del formulario de solicitud de vinculación a dicho fondo que obra a folio 26, con fecha de efectividad 01 de noviembre de dicha anualidad, según se desprende del certificado SIAFP que milita a folio 44 del documento 03 del expediente digital.

De otra parte, si bien la demandante no es beneficiaria del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues no contaba para el 1° de abril de 1994, fecha

de entrada en vigencia del sistema general de pensiones de la Ley 100 de 1993, con 35 o más años de edad o 15 años de servicio, ello no es óbice para que la AFP PROTECCIÓN S.A. en el año 1997 estuviera en la obligación de suministrarle la información clara, completa y oportuna respecto de las ventajas y desventajas de cada régimen pensional; **sobre todo cómo alcanzaría la pensión de vejez y de qué dependería su monto en el RAIS.**

Sobre el deber de información antes citado, escuchado el interrogatorio de parte que fue absuelto por la demandante, el cual se encuentra grabado a partir del minuto 00:14:54 del video de la audiencia de conciliación, trámite y juzgamiento (Documento 14 del expediente digital), no se advierte que, además de señalar que la asesor de PROTECCIÓN S.A. le indicó que le convenía trasladarse a dicho fondo porque era privado y por tanto iba a tener más garantías, que los dineros que ella iba a aportar a dicho fondo se iban a invertir que iban generar muchos rendimientos, quedándose afiliada en el régimen publico corría riesgo de quedarse sin pensión, que en el fondo privado podía heredar el dinero a su beneficiario y que el fondo se encargaba de trasladar las cotizaciones efectuadas en el RPM hacia el RAIS, esta haya confesado que al momento de su traslado de régimen se le ilustró sobre aspectos neurálgicos de los regímenes pensionales, como lo son la explicación clara de las características de uno y otro régimen pensional, los requisitos para acceder a las prestaciones económicas en cada uno de ellos, la forma de liquidación de la mesada pensional en cada régimen, la oportunidad de trasladarse entre regímenes y entre administradoras y los términos para ello, entre otros aspectos que resultan necesarios para considerarse que se otorgó una información completa, comprensible y suficiente.

Ahora, como bien lo manifestó al Juez *a quo*, ha señalado claramente la Jurisprudencia de la SCL de la CSJ, que para probar dicha asesoría, no basta la firma del formulario con la inscripción pre impresa sobre que el traslado fue voluntario, sino que se requiere que se pruebe que en realidad esa voluntad obedeció al suministro de una debida asesoría, para acreditar que el traslado se realizó con pleno conocimiento informado, lo cual no probó la AFP PROTECCIÓN S.A., siendo su carga como ya lo ha establecido la jurisprudencia especializada, por lo que habrá de confirmarse en esta instancia la decisión del *a quo* de declarar ineficaz el acto de traslado de régimen pensional realizado por la demandante en el año 1997, cuando se trasladó del RPM al RAIS a través de la AFP PROTECCIÓN S.A., así como la orden a Colpensiones de reactivar la afiliación de la demandante en el RPM sin solución de continuidad.

De otra parte, en lo referente a las **sumas que deben ser devueltas** a COLPENSIONES y frente a las cuales el a quo determinó que PROTECCIÓN S.A. debe trasladar a COLPENSIONES, la totalidad de las sumas que hubiese recibido como producto de las cotizaciones realizadas por la demandante durante su permanencia en el RAIS, es decir, el 100% de las cotizaciones, con sus respectivos rendimientos financieros, incluyendo además en dicha devolución los porcentajes destinados a administración, pago de primas de seguros previsionales y fondo de garantía de pensión mínima, encuentra la Sala que la orden impartida por el a quo se encuentra acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en dicha materia y por ende debe ser **CONFIRMADA**, pues al declararse la ineficacia del acto de traslado, **ningún efecto jurídico puede derivarse de este**, como lo ha señalado de manera reiterada la SCL de la CSJ en sentencias CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018 y CSJ SL1421-2019.

Al respecto, ha explicado la Corte Suprema de Justicia que las consecuencias prácticas de la ineficacia son idénticas a las de la nulidad, señalando la Sala Civil de la alta Corporación que: *«cualquiera sea la forma en que se haya declarado la ineficacia jurídica (entendida en su acepción general), bien porque falte uno de sus requisitos estructurales, o porque adolezca de defectos o vicios que lo invalidan, o porque una disposición legal específica prevea una circunstancia que lo vuelva ineficaz, la consecuencia jurídica siempre es la misma: declarar que el negocio jurídico no se ha celebrado jamás»* (CSJ SC3201-2018).

En este orden de ideas, como lo dispone el art. 1746 del C.C., norma que regula las restituciones mutuas en el régimen de nulidades: *“La nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada, da a las partes derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”*.

En este sentido se pronunció igualmente la SCL de la CSJ, sentencia 31989 de 8 de septiembre de 2008 y lo reiteró en sentencias SL4964-2018, SL4989-2018, SL1421-2019 y SL1688-2019, en la que precisó:

“La administradora tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor, como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses como los dispone el artículo 1746 del C.C., esto es, con los rendimientos que se hubieren causado.

“Como la nulidad fue conducta indebida de la administradora ésta debe asumir a su cargo los deterioros sufridos por el bien administrado, esto es, las mermas

sufridas en el capital destinado a la financiación de la pensión de vejez, ya por pago de mesadas pensionales en el sistema de ahorro individual, ora por los gastos de administración en que hubiere incurrido, los cuales serán asumidos por la Administradora a cargo de su propio patrimonio, siguiendo para el efecto las reglas del artículo 963 del C.C.

“Las consecuencias de la nulidad no pueden ser extendidos a terceros, en este caso, a la administradora del régimen de prima media en el que se hallaba la actora antes de producirse la vinculación cuya nulidad se declara, de modo que no debe asumir por el sistema de pensiones sanciones derivadas de la mora en el pago íntegro del derecho pensional, obligaciones por las que sólo ha de responder a partir de cuando le sean trasladados los recursos para financiar la deuda pensional por parte de la entidad aquí demandada.”

Por otra parte, contrario a lo argumentado por la apoderada de PROTECCIÓN S.A. en su recurso de alzada, al tratarse de la declaratoria de un acto ineficaz que acarrea los mismos efectos de uno nulo, no es dable concebir, so pretexto del principio de la buena fe o de una buena gestión en la administración del bien, que los denominados gastos de administración, entre los cuales se encuentran incluidos los seguros previsionales, queden por fuera de las restituciones, de un lado, porque se trata de rubros que pertenecen al régimen de prima media con prestación definida, y por ello son necesarios para su funcionamiento, y por otro, porque es la indebida actuación por parte de la AFP demandada, al no proveer a la demandante al momento del traslado la información clara, completa y comprensible a través de sus asesores, que tiene como consecuencia, además del hecho de generar la declaratoria de ineficacia, que deba asumir de su patrimonio los perjuicios que se ocasionen a los afiliados y las sumas sufragadas a terceros, como lo son las aseguradoras previsionales, ello con base en los artículos 2.2.7.4.1 y 2.2.7.4.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, que compiló los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994.

En cuanto a la excepción de PRESCRIPCIÓN formulada por las demandadas al dar respuesta a la demanda, se tiene que, bajo la óptica jurisprudencial de la ineficacia del traslado de régimen introducido por la SCL de la CSJ, al concluirse que el acto jurídico de traslado de régimen nunca nació a la vida jurídica, no es procedente aplicar la prescripción, conforme puntualmente lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL1689-2019, proferida el 8 de mayo de 2019.

Conforme a las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada y consultada será CONFIRMADA en los términos anteriormente expuestos.

COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. por haber resultado vencida en el recurso de apelación. Las agencias en derecho, conforme al Nral. 3 del Artículo 366 del CGP, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR ÍNTEGRAMENTE la sentencia del 12 de mayo de 2021 proferida por el JUZGADO VEINTICUATRO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN, en el proceso ordinario laboral promovido por la señora **BEATRIZ ELENA FORERO URIBE**, contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES**, y la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A.**

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y a favor de la demandante. Las agencias en derecho, las estima el ponente en la suma de \$1.000.000.

La anterior sentencia se notifica a las partes en EDICTO.

Oportunamente devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma por quienes en ella han intervenido, los magistrados,

Firmado Por:

Francisco Arango Torres
Magistrado

Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **eccb183f6d7ab92ac856fd936453a1959adc44235e0b52b7fe64cf0db976796c**

Documento generado en 14/07/2022 02:26:05 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>